



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III
FLP 13016569/2012/7/CA4

La Plata, 9 de marzo de 2022.

AUTOS Y VISTOS: este expediente FLP 13016569/2012/CA4, caratulado: "MAZZACANE, Juan Manuel s/ legajo de apelación", procedente del Juzgado Federal de Primera Instancia n° 1, secretaría n° 3, de esta ciudad;

Y CONSIDERANDO:

I. El caso.

Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la defensa de Juan Manuel Mazzacane, contra la decisión del *a quo* mediante la cual, habiendo dictado la suspensión de la acción penal en los términos del art. 10 de la ley 27.541 (FLP 130165969/2012/4), no hiciera lugar al levantamiento del embargo que fuera dispuesto sobre el inmueble ubicado en calle 21 n°117, entre 34 y 35, de esta ciudad.

II. Antecedentes.

Un breve repaso de algunos antecedentes de la causa principal y de este incidente muestra que:

1. Juan M. Mazzacane -directivo de la firma Quilmes Tolosa S.A.- fue procesado sin prisión preventiva por ser considerado *prima facie* autor penalmente responsable del delito de "(...) evasión tributaria simple, en concurso real (dos hechos), en concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), periodo 2012, por un perjuicio de \$3.075.810,08 e Impuesto a las Ganancias, ejercicio 2012, por un perjuicio fiscal de \$1.839.935,54, ocasionándole a la hacienda pública un perjuicio económico total estimado de \$4.915.745,62 (...)".





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III
FLP 13016569/2012/7/CA4

Conjuntamente, se dispuso trabar embargo sobre sus bienes por la suma de \$8.000.000.

2. Para hacer frente a dicha medida cautelar, Mazzacane ofreció un inmueble ubicado en calles 21 entre 34 y 35 n° 117 de esta ciudad con una valuación estimada entre U\$s 350.000 y U\$s 370.000.

3. Esta Sala confirmó dicha decisión en todos sus términos (véase expte. FLP 13016569/2012/CA3, resolución del 29/9/2019) siendo que, una vez concluidas las vías recursivas intentadas por las partes, el *a quo* decretó la clausura de la instrucción dando inicio al procedimiento de elevación a juicio.

4. En oportunidad de correr la vista prevista en el art. 349 del C.P.P.N., la defensa del encausado puso en conocimiento del acogimiento de su asistido a los beneficios previstos por la ley 27.541 y solicitó la suspensión de la acción penal. Ello, conforme lo establecido en el art. 10 de dicha normativa, obteniendo una decisión favorable al respecto. Acto seguido, solicitó el levantamiento del embargo ordenado con el dictado de su procesamiento.

5. Tanto la parte querellante como el fiscal se manifestaron por el rechazo de tal pretensión fundando su posición en que si bien la acción penal se encuentra suspendida, es susceptible de reanudarse ante la eventual caducidad del plan de facilidades al que se acogió la firma denunciada como solución alternativa del proceso -ley 27.541, artículo 10-. Solo con la total cancelación de la deuda, es que se producirá la extinción de la acción penal. Asimismo, se





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III
FLP 13016569/2012/7/CA4

sostuvo que, de ser acogida de manera favorable la petición de levantamiento de embargo solicitado, tanto el inmueble -como otros bienes- podrían sustraerse del patrimonio de Mazzacane, insolventarse y volver ilusorias sus responsabilidades ante una eventual reanudación del proceso, lo que ocasionaría un perjuicio irreparable para el fisco.

6. Por su parte, la defensa del peticionante rechazó aquella tesitura. Para ello, recurrió a las previsiones del art. 11 de la Resolución General n° 4816 de la AFIP, reglamentaria de la ley n° 27.541, afirmando que allí se contemplaría *"(...) el levantamiento de las medidas cautelares sin tener en cuenta la condición del decaimiento del régimen por falta de pago"*.

7. Ante una nueva vista, el fiscal ante la primera instancia compartió el criterio de la parte querellante, y sugirió mantener la medida dispuesta o sustituirla por otra de carácter juratoria hasta el cumplimiento del plan de pagos acordado.

La defensa, en tanto, ofreció caución personal juratoria pero sólo para responder a las eventuales costas del proceso en caso de que éste se reanude y, eventualmente, sea condenado en costas, pero sin hacer extensiva dicha propuesta al daño causado *"pues ello desnaturalizaría el sentido del régimen de condonación establecido por la ley 27.541"*. Nuevamente requirió la aplicación del art. 11 de la Resolución General N° 4816.

III. La decisión recurrida y los agravios de la defensa.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III
FLP 13016569/2012/7/CA4

1. Como se señalara en el considerando I. de este decisorio, el *a quo* rechazó el nuevo pedido del levantamiento del embargo así como la sustitución de dicha medida por la caución juratoria en los términos referidos.

Fundó su decisión al considerar que el peticionante yerra al pretender equiparar las consecuencias jurídicas de la suspensión de la acción a las de su extinción, y recordó que en su oportunidad, fueron valoradas la verosimilitud y la proporcionalidad de la cuantía de la cautelar discutida bajo el prisma de los parámetros objetivos y doctrinarios establecidos legalmente.

Consideró que tanto el levantamiento del embargo solicitado, como el ofrecimiento sustitutivo de una caución de tipo juratoria, resultaban insuficientes para asegurar de manera integral los fines para los que fuera concebida originalmente la medida cautelar patrimonial dictada.

Por último, contempló que sobre el perjuicio económico total de \$ 4.915.745,62 pesos resultante de los hechos reprochados, podría caber la aplicación de intereses resarcitorios y punitivos, como así también la eventual pena de multa en sede administrativa por parte del organismo fiscalizador.

2. Apelada dicha decisión por la defensa, se originó la apertura de esta instancia.

Los agravios del recurrente al introducir el recurso están dados por el "*gravamen irreparable*" generado en tanto "*Vuestra Señoría hace una interpretación parcial y sesgada de la norma administrativa invocada por esta parte y*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III
FLP 13016569/2012/7/CA4

además los motivos del embargo en sede penal por deudas tributarias, resultan generales y no se adecuan a los procesos de naturaleza penal tributaria, como es el caso concreto" y porque considera que la inmovilización de un bien sin más fundamentos que la decisión del Tribunal compromete garantías constitucionales.

Al presentarse en los términos del art. 454 del C.P.P., agregó que "(p)ero si el beneficiario de esa medida cautelar [AFIP] por propia iniciativa ante la entrada en un régimen de regularización y condonación, dicta una resolución interna obligatoria, donde dispone el levantamiento de las medidas cautelares que pudiera haber y si bien lo hace como ejemplo respecto de cuentas bancarias o inversiones, no puede el Juez penal hacer una interpretación restrictiva de esa medida aludiendo a que solo es en esos casos de medidas cautelares". Aclaró asimismo que "los regímenes de regularización y condonación en ningún momento piden que se cautele por la deuda regularizada, ni se pide caución de la misma para aceptar el plan."

IV. Los memoriales de la parte querellante y del Ministerio Público.

La parte querellante -AFIP- dijo que la defensa realizó una incorrecta interpretación del art. 10 de la ley 27.541, su modificatoria ley 27.562, y de lo dispuesto en el art. 11 de la Resolución General 4816 (AFIP) por cuanto la redacción de dicha norma "(...) no deja lugar a cuestiones interpretativas: el mero acogimiento produce únicamente la suspensión, de las acciones penales en curso" mientras que es recién con la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III
FLP 13016569/2012/7/CA4

eventual cancelación total de la deuda que se produciría la extinción de la acción penal. En suma, afirmó, ni siquiera la norma hace mención a embargos sobre bienes inmuebles, como el involucrado en la presente causa.

El Fiscal General ante la Alzada, por su parte, dictaminó en línea con la querella y con lo decidido por el juez *a quo*.

V. Consideración de los agravios.

1. Marco normativo. Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, su modificatoria ley 27.562 y su reglamentaria, Resolución General 4816 de AFIP.

En lo que aquí interesa, se dirá que el art. 10 de la ley 27.541 prevé los efectos al acogimiento al régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social que regula el propio cuerpo normativo.

Concretamente, establece que *"La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen, por compensación, de contado o mediante plan de facilidades de pago, producirá la extinción de la acción penal tributaria o aduanera, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación."* y que *"La caducidad del plan de facilidades de pago implicará la reanudación de la acción penal tributaria o aduanera, según fuere el caso, o habilitará la promoción por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos de la denuncia penal que corresponda, en aquellos casos en que el acogimiento se hubiere dado en forma previa a su interposición. También importará el*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III
FLP 13016569/2012/7/CA4

comienzo o la reanudación, según el caso, del cómputo de la prescripción penal tributaria y/o aduanera."

Por su parte, el art. 10 de la Resolución General 4816 de AFIP -reglamentaria de la ley 27.541- establece que "Cuando se trate de deudas en ejecución judicial, acreditado en autos el acogimiento al régimen, encontrándose firme la resolución judicial que tenga por formalizado el allanamiento a la pretensión fiscal, satisfecho el ingreso del pago a cuenta -de corresponder-, y una vez regularizada en su totalidad la deuda demandada, los honorarios y las costas del juicio, en los términos de la presente norma, esta Administración Federal solicitará al juez interviniente el archivo de las actuaciones".

"Cuando la adhesión resulte anulada, rechazada o se produzca la caducidad del acogimiento por cualquier causa, esta Administración Federal impulsará las acciones destinadas al cobro de la deuda en cuestión, conforme a la normativa vigente."

Luego, es el art. 11 de dicha R.G. el que regula que "Cuando se trate de deudas en ejecución judicial por las que se hubiere trabado embargo sobre fondos y/o valores de cualquier naturaleza, depositados en entidades financieras o sobre cuentas a cobrar, así como cuando se hubiere efectivizado la intervención judicial de caja, la dependencia competente de esta Administración Federal -una vez acreditado el acogimiento al régimen por la deuda reclamada- arbitrará los medios para que se produzca el levantamiento de la respectiva medida cautelar."





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III
FLP 13016569/2012/7/CA4

"En el supuesto que el embargo se hubiere trabado sobre depósitos a plazo fijo, el levantamiento se comunicará una vez producido su vencimiento."

"De tratarse de una medida cautelar que se hubiera efectivizado sobre fondos o valores depositados en cajas de seguridad, el levantamiento deberá disponerlo el juez que la haya decretado."

2. El análisis conjunto de las normas que regulan la cuestión, permite inferir en línea con lo sostenido por el juez a quo, que el levantamiento del embargo al que alude el art. 11 de la RG 4816 -que se trata, cabe resaltar, de un marco regulatorio interno de la AFIP- se encuentra *prima facie* dirigido a aquellas medidas cautelares trabadas "sobre fondos y/o valores de cualquier naturaleza, depositados en entidades financieras o sobre cuentas a cobrar, así como cuando se hubiere efectivizado la intervención judicial de caja" no haciendo alusión a la traba de embargo sobre bienes (inmuebles), como sucede en el caso.

De hecho la regulación acerca del procedimiento de levantamiento de la medida se encuentra casi exclusivamente dirigido a procedimientos bancarios y financieros dado que, en palabras del juez a quo, "(...) aquel artículo está dirigido a impedir que las medidas cautelares aplicadas sobre dinero líquido, cuentas bancarias y valores negociables de las personas físicas o jurídicas sancionadas, obstaculicen su giro comercial normal durante el transcurso del proceso de cumplimiento del plan de moratoria."





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III
FLP 13016569/2012/7/CA4

3. Ahora bien, por otro lado, la circunstancia de que Juan Manuel Mazzacane se haya acogido al régimen de regularización que le brinda la ley 27.541, no implica que con ello hayan quedado erradicadas las razones que en su momento justificaron el dictado de la medida cautelar discutida.

Tal como refiere el *a quo* y luego enfatiza el fiscal de cámara, persisten las circunstancias fácticas consideradas tenidas en miras al adoptar aquella decisión, aún a pesar de la suspensión de la acción penal.

Más aún, el avance del requerimiento de elevación a juicio se encuentra supeditado al eventual cumplimiento de las obligaciones asumidas por el encausado con el organismo recaudador, según el plan de pagos acordado entre ambas partes.

4. En esos términos, este Tribunal entiende que -por el momento- debe mantenerse la medida cautelar dictada con la salvedad efectuada en origen en relación a la posibilidad de que la defensa ofrezca bienes suficientes u otras alternativas para asegurar de igual o mejor modo el monto mesurado en su oportunidad, en garantía de sus beneficiarios (art. 203 C.P.C.C.N).

Por todo ello, **SE RESUELVE:**

CONFIRMAR la decisión apelada en todo cuanto decide y fuera materia de agravio.

Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.

CARLOS ALBERTO VALLEFIN
JUEZ

ROBERTO AGUSTÍN LEMOS ARIAS
JUEZ

Fecha de firma: 09/03/2022

Alta en sistema: 16/03/2022

Firmado por: MARIA ALEJANDRA MARTIN, SECRETARIA FEDERAL

Firmado por: ROBERTO AGUSTIN LEMOS ARIAS, Juez de Cámara

Firmado por: CARLOS ALBERTO VALLEFIN, JUEZ DE CAMARA



#35875106#319222158#20220309102328824



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III
FLP 13016569/2012/7/CA4

Ante mí:

MARIA ALEJANDRA MARTIN
SECRETARIA FEDERAL

Se deja constancia de que la presente resolución se dicta conforme a lo previsto por el artículo 31 bis, último párrafo, in fine del CPPN (art. 109, RJN).

MARIA ALEJANDRA MARTIN
SECRETARIA FEDERAL

